

hace en la práctica inviable la necesaria reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que exige la propuesta del Ejecutivo.

En Moncloa, sin embargo, pretenden hacer una vez más de la necesidad virtud y aprovechar el debate para establecer el marco en el que quieren que se jueguen las próximas elecciones autonómicas, el del cuidado de los servicios públicos, en manos de las autonomías, y la defensa del Estado del bienestar. Del mismo modo que Junqueras apeló, sin citarlo expresamente, a Junts al advertir de que de su voto depende que se implemente una reforma en la que «quienes ganan son los servicios públicos, los hospitales, el tejido productivo, los trabajadores», desde el Gobierno se apeló a través de un comunicado al primer partido de la oposición: «Es incompatible creer en el Estado del Bienestar y en el Estado de las Autonomías y no apoyar la necesaria reforma del modelo».

Fuentes gubernamentales admiten que con esta iniciativa se enfrentan a un «reto comunicativo» que contribuye a alimentar el hecho de que se haya cedido el anuncio de una cuestión que afecta a todas las autonomías del régimen común no ya al Gobierno de una de ellas sino a un socio independentista pero esgrimen que será fácil demostrar que lo que se plantea no es un «privilegio» para nadie. «Los datos están a nuestro favor y tanto Pilar en Aragón como María Jesús en Andalucía –dicen en alusión a las candidatas socialistas– tendrán argumentos de sobra para responder al PP».

Ayer el Ejecutivo empezó por acusar a los populares de haber dejado que el sistema actual «caducara» en 2014, cuando debía haber sido revisado, aunque fuentes socialistas admiten que entonces, en plena crisis, y con unos niveles de recaudación muy bajos resultaba casi imposible hacer una propuesta que satisficiera a nadie. En los casi ocho años de Gobierno de Sánchez también se ha ido postergando la presentación de una propuesta de reforma que siempre ha sido un puzzle complicado de armar en el que los distintos territorios se alinean al margen de sus siglas políticas.



Josep Rius, portavoz de Junts, atiende ayer a los medios. EP

## Junts solo ve «más café para todos y millones que no llegan»

**Illa recibe hoy a Junqueras para analizar los detalles de la nueva financiación autonómica y aventura «buenas noticias» para el conjunto de España**

**IVA ANGUERA**

**BARCELONA.** «No estamos ante un cambio de modelo, se perpetúa el actual modelo, que no resuelve el déficit fiscal que sufre Cataluña». A falta de conocer los detalles del nuevo modelo de financiación pactado por Gobierno y ERC, que este viernes debe explicar la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Junts ha dado portazo a la propuesta.

El portavoz del partido, Josep Rius, lamentó este jueves que la propuesta avanzada por el líder

de ERC, Oriol Junqueras, tras reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa «sigue siendo más café para todos». En este contexto advirtió de que lo único que ha arrancado ERC es una promesa de «lluvia de millones». Y «las lluvias de millones prometidos nunca llegan a Cataluña» añadía. En el partido de Carles Puigdemont lamentan además que no se trate de un modelo exclusivo para Cataluña sino de una mejora general. Lo dice la Moncloa –añadía Rius– «todos los territorios recibirán más dinero» mientras «Madrid sigue teniendo la llave de la caja». Esto es, el control de los ingresos.

Por eso desde el partido catalán auguran una difícil tramitación para la nueva financiación autonómica en las Cortes. El Gobierno tiene garantizada la mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que la próxima semana presen-

tará el modelo al conjunto de las comunidades de régimen común.

Pero en el Congreso necesitará el apoyo de toda la mayoría que permitió la investidura, en la que los siete votos de Junts son claves. Y Junts ya avanzó el miércoles que no votaría nada que no sea un concierto económico equiparable al de las comunidades forales. La primera reacción de los de Puigdemont, antes incluso de la comparecencia de su portavoz, fue preguntarse «¿dónde está el concierto económico que se pactó para invertir a Salvador Illa?» para expresar su rechazo a lo pactado.

La reforma anunciada por Junqueras tampoco convence a la CUP. Su portavoz en el Parlamento, Su Moreno, ha «expresado serias dudas» sobre la propuesta. «Por eso instamos a Esquerra a abandonar una política de renunciaciones», ya que a su

**El acuerdo ha servido para rehacer el tripartito de izquierdas catalán: PSC, ERC y Comunes comparten entusiasmo**

juicio «la soberanía no se compra», y volver al camino del puro independentismo.

**Vía libre para Illa**

El acuerdo anunciado este jueves sí ha servido, sin embargo, para rehacer el tripartito de izquierdas catalán. PSC, ERC y Comunes comparten su entusiasmo por una propuesta que reportará 4.700 millones de euros más a las arcas de la Generalitat. Y así lo escenificarán el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de ERC con un encuentro este viernes en el Palau de la Generalitat.

Un encuentro en el que podrían ponerse las bases de los presupuestos de la Generalitat para 2026, para los que el PSC necesita el apoyo de republicanos y morados. Esquerra se había negado hasta ahora a entrar en esta negociación, aduciendo que primero quería llegar a un acuerdo sobre la reforma de la financiación autonómica. Antes incluso de que concluyera la reunión entre Sánchez y Junqueras en la Moncloa el presidente de la Generalitat ya aventuró buenas noticias para los intereses catalanes. Illa auguró buenas noticias «para el conjunto de Cataluña y el conjunto de España» en materia de financiación en los próximos días y semanas.

Por su parte, el portavoz de los Comunes, David Cid, se felicitó por los resultados del acuerdo avanzados por Esquerra. Se trata de un modelo «imprescindible» señaló Cid recordando que el modelo «está caducado desde 2014». Para los Comunes –referente de Sumar en Cataluña– lo anunciado por Junqueras supone «una victoria y un avance importante para Cataluña» por el aumento de recursos que representa para las arcas de la Generalitat. Unos recursos para el que los morados ya han fijado destino: las políticas de vivienda.

sidente de Murcia, Fernando López Miras, en redes sociales, avisando de que su Gobierno no se va a conformar «con las migajas de un acuerdo indigno». Para el mandatario de Aragón, Jorge Azcón, el acuerdo con los independentistas significa «desigualdad e insolidaridad». «Un agravio para nuestra comunidad como nunca se había conocido», denunció, antes de avanzar su intención de pedir a Hacienda que se convoque con carácter «urgente» una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

También el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, afeó al Gobierno que empiece el debate sobre la financiación con una reunión con un líder soberanista y advirtió que «no es un comienzo que

**García-Page avisa de que el acuerdo sellado con ERC «no es un buen comienzo» y «no facilita un clima de entendimiento»**

facilite un clima de entendimiento». Para García-Page el objetivo «es conseguir un buen modelo de financiación que trate por igual a todos los ciudadanos, vivan donde vivan en España».

**Recurso ante el Constitucional**

El presidente andaluz, Juanma Moreno, advirtió, por su parte, de que «Andalucía no va a consentir un nuevo maltrato del Gobierno y que se rompa la igualdad». Más contundente se mostró su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien anun-



Alberto Núñez Feijóo. EFE

ció que su Ejecutivo pondrá en marcha «todos los recursos legales» a su alcance si se consuma el acuerdo avanzando un posible recurso ante el Constitucional.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, censuró que el acuerdo sellado confirma que hay una comunidad privilegiada sobre las demás», de manera que «primero se hace un primer reparto y, después, lo que sobra, para los demás». «Es malo para Cataluña y malo para España», zanjó el líder del PP catalán, Alejandro Fernández.